

Viejo y nuevo Partidos y sistemas de partidos en las democracias andinas

Alfredo Ramos Jiménez

Alfredo Ramos Jiménez: politólogo venezolano, director del Centro de Investigaciones de Política Comparada, Universidad de Los Andes, Mérida; autor de *Los partidos políticos en las democracias latinoamericanas* (ULA, 1995) y *Las formas modernas de la política. Estudio sobre la democratización de América Latina* (C-IPC, 1997).

Palabras clave: partidos, sistemas de partidos, democracia, área andina.

A partir de una aproximación comparativa se aborda la cuestión de los partidos y sistemas de partidos en los países andinos en la década de los 90, con sus líneas tendenciales hasta nuestros días. Si bien es cierto que los partidos no han tenido buena prensa en los años recientes, debido a su evidente declive como formas de participación y de representación de intereses, su retorno como fuerzas políticas renovadas que impulsan la democratización, se da por descontado, y comienza a revelarse como el inicio de experiencias inéditas, frente a los ensayos neopopulistas de corte autoritario que se presentan ante los ciudadanos como fórmulas políticas de redención social. Así, la gobernabilidad en crisis debe encontrar en el fortalecimiento de los partidos y sistemas de partidos el mecanismo básico para el relanzamiento de la democracia en todos los países del área.

La década de los 90 en los países andinos superó con mucho la «movida política» del decenio precedente, a tal punto que los procesos de democratización en marcha se vieron amenazados por la inestabilidad e incertidumbre de los resultados. La visión sobre los hechos relevantes de la política en el área se ha dividido entre quienes asumieron posiciones pesimistas sobre la transición un tanto traumática en sus primeros pasos, y los optimistas, más abiertos en sus observaciones sobre los rasgos evolutivos de los diversos procesos orientados hacia el nuevo siglo. Pero, parece que fue Paul Valery quien afirmó alguna vez que, en cuanto a la política, los optimistas escriben mal y los pesimistas escriben muy poco, por lo que habría que matizar un tanto nuestras aproximaciones a fenómenos localizados en el tiempo y espacio correspondientes a la América andina¹.

Asimismo, debemos tener cuidado con el riesgo que representa limitar nuestros estudios y diagnósticos al examen de los meros síntomas de las diversas situaciones, eludiendo con ello unos cuantos desarrollos que, como veremos en estas notas, adquieren en otros tantos casos nacionales el carácter de fenómenos relevantes –con frecuencia asumidos como excepcionales– cuando se trata de dar cuenta de lo que ha pasado efectivamente. También es cierto que en la mayoría de los casos los sociólogos

y politólogos trabajamos con hipótesis y categorías de análisis *ex-post* que se quedan cortas ante la dimensión y vertiginosidad de los cambios sociales que preceden a los movimientos de la política.

Y no es para menos, puesto que los principales actores en los diversos procesos de democratización –específicamente de construcción institucional– aparecen hoy en día fatigados, si no desacreditados frente a la población, que observa desmovilizada y pasiva las diversas negociaciones y reorientaciones que adelanta el «nuevo» personal político. Y ello ha ocurrido casi uniformemente en todos y cada uno de los países andinos. De modo tal que una observación detenida del proceso debería partir del tratamiento de aquellos cambios que anuncian o comprenden reacomodos –si no reordenamientos– de la sociedad política, si consideramos a esta última como el elemento dinámico en la instauración de la democracia política en nuestros países². En este intento, nos detendremos en aquella *party politics* regional que agrega y articula, no sin dificultades, los intereses, identidades e instituciones y que hasta aquí ha sido estudiada como participación de actores individuales y colectivos, inmersos en una difícil democratización de la vida política.

Si partimos del hecho, aún no desmentido en la teoría ni en la práctica, de que los partidos constituyen instituciones imprescindibles para el funcionamiento de la democracia, entonces debemos admitir que todo el «conjunto de procedimientos estandarizados», identificados con objetivos políticos, ha ido entrando en un franco retroceso a partir de la década de los 90, configurando situaciones de crisis política o de bloqueo institucional, en las que se han ido imponiendo soluciones autoritarias de corte populista, cuyo costo social parece haber afectado durablemente a las endebles economías de los países del área.

En su momento, los investigadores ecuatorianos estuvieron preocupados con el «bucaramismo en el poder»³, los peruanos con la «persistencia del autoritarismo fujimorista»⁴, los venezolanos comienzan a advertir las veleidades personalistas y autoritarias en el «fenómeno Chávez»⁵. Y, si bien es cierto que casi todos han dejado de lado la tesis ya recurrente de «una crisis de los partidos», los estudios se orientan cada vez más hacia esa «tierra de nadie» en la que ya no es posible eludir el examen de la naturaleza y envergadura de los cambios introducidos en las formas locales o regionales de hacer política.

El desencanto democrático

Como lo afirmara Norberto Bobbio, la democracia se ha mantenido a pesar del incumplimiento de sus principales promesas. Y lo más que ha podido suceder no ha sido un clima de desencanto o de «fatiga cívica», sino de desengaño anómico y pasivo, que no afecta significativamente al ideal democrático que impulsa a los actores sociales hacia la instauración de unas reglas de juego que les permitan competir por los puestos de dirección política⁶. Y es que en los diversos sistemas políticos de América Latina, temprano en los años 80, la democratización arrancó con el fortalecimiento de los partidos. De aquí que el modelo imperante no haya sido otro que el de la «democracia

de partidos», si bien el mismo aparece vinculado con problemas cruciales de la representación política y de una ciudadanía casi inalcanzable⁷.

En los países andinos, que habían sufrido un autoritarismo menos represivo que en los del Cono Sur, los partidos habían «convivido» con los diversos regímenes militaristas. Las expectativas de la democratización en los años 80 alimentaron las ambiciones de una clase política en ciernes, si bien es cierto que en Venezuela (desde 1958) y en Colombia (desde 1957), un bipartidismo con características duopólicas se había venido consolidando, ocupando casi por completo los espacios de la competición político-electoral y de la estructura gubernamental según los casos. La presencia partidista revela entonces una hegemonía que reducía las posibilidades de incorporación a las eventuales terceras fuerzas⁸. Ello no ocurre en el resto de países andinos: en Perú, el desarrollo de los «pequeños» partidos de la izquierda socialista ya se hacía sentir electoralmente en la década de los 80, ocupando un espacio dejado por la derecha tradicional y el centro populista del APRA; en Ecuador, ni el sistema electoral de dos vueltas había logrado atenuar el fraccionamiento de un pluripartidismo irreductible, aunque una mayor presencia de dos principales partidos con vocación centrista (la Izquierda Democrática [ID], socialdemócrata y la Democracia Popular, democristiana) dejaba, hacia la derecha, a los partidos tradicionales (Conservador y Liberal) y a un renovado Partido Socialcristiano, y hacia la izquierda a los partidos herederos del populismo de Jaime Roldós; en Bolivia, la fuerza del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Paz Estenssoro, afianzada con sus triunfos electorales, y de la Alianza Democrática Nacionalista (ADN) de Hugo Banzer, dejaba hacia la izquierda tanto al populismo nacionalista de Conciencia de Patria (Condepa) y de la Unidad Cívica Solidaridad como a la socialdemocracia del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Así, en estos tres países el pluripartidismo traduce netamente las principales líneas de clivaje de orden socioeconómico, y el realineamiento posterior, que se produce en los años 90 con la implementación de políticas neoliberales, habría de establecer una nueva línea de ruptura que, al tiempo que ponía a prueba a los partidos del gobierno (destaquemos las experiencias gubernamentales del APRA de Alan García en Perú, de la ID de Rodrigo Borja en Ecuador, y del MIR de Paz Zamora en Bolivia), acusados de incumplimiento de sus promesas electorales, fortalecía en esos países las opciones neopopulistas de corte autoritario.

En la medida en que la condena de los partidos del estatus fue canalizada originalmente por fuerzas políticas «innovadoras», la estrategia de estas últimas incorporaba el extendido sentimiento de frustración de electorados que comienzan a vivir el desengaño de la «promesa democrática». Y si bien es cierto que el desencanto es masivo, la fatiga cívica afecta también a los principales partidos, particularmente a la base militante, provocando con ello no solo el surgimiento de las condiciones para el advenimiento de una política del «gran rechazo» –crecimiento del «voto castigo» en todos los países– sino de fórmulas antipolíticas que promueven candidaturas de *outsiders*, que en todos los países del área representan la entrada en la arena política de claras opciones antipartido⁹. En las fuentes de ese «gran rechazo» se ha observado tanto el «miedo social» a la crisis económica y al terrorismo, particularmente en Perú y Colombia, como la degradación de los equipos dirigentes de los principales partidos: en

Venezuela, el crecimiento de la corrupción y las políticas neoliberales del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez; en Ecuador, la ineficiencia de los gobiernos socialdemócrata y democristiano; en Perú, el fracaso del primer gobierno del APRA y, en fin, en Bolivia, la parálisis de los gobiernos sucesivos del MIR y del MNR, habían minado todos los intentos por conjurar la gravedad de la crisis, dando como resultado el inevitable desgaste de los principales partidos en el gobierno y en la oposición¹⁰.

Los triunfos de Fujimori (1990), Caldera (1993), Sánchez de Losada (1993), Samper (1994) y de Bucaram (1996), todos portadores de fórmulas alternativas que comportaban unos cuantos matices antipartido, unos más populistas que otros, representaron en su momento la acogida popular de políticas reformistas destinadas a acabar con la frustración, rápida y ampliamente identificada con la democracia.

Los partidos en la época del desmantelamiento institucional

La década de los 90 puede tomarse, para los países andinos, como la del inicio de un proceso de desestructuración partidista, fenómeno que va paralelo con un cierto estrechamiento del ámbito de la política. La crisis política va yuxtaponiéndose a la ya larga crisis económica, afectando profundamente al endeble entramado institucional de una democracia en construcción. De aquí que en nuestras investigaciones se haya impuesto con fuerza la hipótesis según la cual «la política ya no es lo que fue», demandando por tanto la utilización de nuevos instrumentos de análisis, que incorporen observaciones relevantes sobre la dimensión del cambio social y sus efectos políticos¹¹.

En relación con los partidos se produce en esta época un fenómeno doble: por una parte, avanza la profesionalización de la clase política, provocando una suerte de corporatización de los partidos y, por otra, la emergencia, al parecer imprevista, de los «grandes desarticuladores» de la institucionalidad democrática.

Primero, ¿cómo se ha producido esta reorientación corporativa de los principales partidos? Es cierto que con la creciente desideologización y la consiguiente búsqueda electoralista de las posiciones políticas de centro, los partidos han ido consolidando equipos dirigentes especializados y con mayor capacidad para administrar el *do ut des*, que les servirá para reafirmar la tradicional política de clientela entre los dirigentes –el partido– y «su» público¹². Desde el punto de vista de la organización, como lo han advertido algunos autores europeos, a los «partidos de masas» vinieron a superponerse los «partidos atrapado», más eficaces para gestionar la política electoral. Pero estos últimos, a su vez, poco a poco van siendo desplazados por estructuras más profesionales, más cercanas al ejercicio gubernamental y, por lo mismo, más en contacto con el Estado que con la sociedad civil¹³. En los países andinos, este fenómeno se revela en la casi indetenible separación de las dirigencias partidistas en su relación con la base militante y en la consiguiente disociación con amplios sectores de la sociedad civil, terreno en el que parecen haberse impuesto, aunque esporádicamente, los así llamados movimientos sociales. No obstante debe precisarse que éstos en momento alguno contaron con posibilidades reales para

competir con los partidos, tanto en el terreno de la articulación de los intereses como en el de la implementación de la política pública¹⁴.

Asimismo, y en segundo lugar, la profesionalización de los partidos ha provocado en años recientes una mayor personalización del *leadership*, dando paso con ello al surgimiento de los «grandes desarticuladores». Fujimori, en Perú, procederá al proceloso desmantelamiento de las instituciones de la incipiente democracia: partidos, parlamento, aparato judicial, fuerza armada, etc. Después del precedente peruano, surgirán Bucaram en Ecuador y Chávez en Venezuela, esgrimiendo una «soberanía popular» excluyente de «los políticos que han sido» ajustándose a una política restrictiva que promueve en la práctica la despolitización de los ciudadanos-electores y la anomia social. De aquí que los niveles de abstención se hayan elevado en los tres países, rompiendo con una tradición de alta participación electoral, y el terreno de la lucha política se haya desplazado desde los partidos hacia los medios, configurando así algo cercano a lo que Bernard Manin ha denominado «democracia de audiencia», en la cual las opciones electorales resultan más personalizadas y el dominio de las encuestas establece líneas de división diferentes a las de los partidos, respondiendo mejor a las preocupaciones de un electorado desmovilizado que se presenta, sea como «audiencia», o bien como «opinión pública»¹⁵.

Frente a los partidos tradicionales, las fórmulas alternativas, que canalizan las nuevas articulaciones de intereses e identidades, se presentan fuertemente desideologizadas y sus líneas de división o clivaje no representan en modo alguno las tradicionales de clase y, menos aún, de carácter étnico¹⁶. Ello obedece a las características del reducido «mercado político», más inclinado a la relación directa y «sin intermediarios» con el líder de turno, desembocando en un espejismo electoral que ha servido de base para la reivindicación de una «democracia participativa», más abstracta que real, como fórmula superior a la democracia representativa, que prescinde de la organización de partidos políticos.

Con la reciente caída de Fujimori y del fujimorismo ha quedado demostrado hasta qué punto los partidos creados con el objetivo de apuntalar el poder personal de su líder y fundador carecen de uno de los requisitos esenciales de todo partido: la permanencia, que les permite sobrepasar la vida política y física de sus fundadores. Otro tanto se podría decir de los partidos Roldosista, de Abdalá Bucaram, y del Movimiento Quinta República, de Hugo Chávez. En la medida en que se mantienen estrechamente dependientes de la personalidad de su líder, y éste no tiene otro poder que aquel que su popularidad le procura, no poseen mayores esperanzas de vida. De aquí que se pueda afirmar el hecho de que en el contexto de los países andinos, los casos de Colombia y Bolivia, con sus partidos tradicionales que cuentan con orientaciones histórico-ideológicas mínimas y fuertemente arraigados en el tejido social –al abrigo de las amenazas neopopulistas– son más bien la excepción, porque si bien es cierto que la presencia de candidatos *outsiders* y antipolíticos en los procesos electorales recientes en los dos países (Mockus, Sanín y Valdivieso en Colombia, Carlos Palenque y Max Fernández en Bolivia) no ponía en peligro en modo alguno la estabilidad de los sistemas partidarios, no lo es menos que una cierta solidez de la clase política le habría

permitido neutralizar los avances electorales de tales alternativas. Tal vez en el Ecuador pos-Bucaram, el fenómeno se reproduce con el retorno de la DP de Jamil Mahuad y del PSC de Febres-Cordero, y en el Perú pos-Fujimori, con el imprevisto regreso del APRA de Alan García, y ello en circunstancias tales que el descrédito de los partidos en los países andinos se ha mantenido más alto que en el resto de países latinoamericanos¹⁷.

El hecho de que los partidos se presenten como los legítimos portadores de los intereses e identidades ha sido, por consiguiente, consagrado por el derecho y por la práctica política. En años recientes, tanto en Perú como en Ecuador y Bolivia, la *política de partido* ha resultado ampliamente reivindicada a partir de la desmitificación de las soluciones y propuestas neopopulistas de carácter autoritario. En el caso de Colombia, la fuerza electoral de las opciones antipartido se ha revelado exitosa solo en el plano local, puesto que, en el ámbito nacional, las candidaturas emergentes exteriores al bipartidismo no parecen contar con fuerza movilizadora para convencer a un electorado escéptico y temeroso ante los excesos de la violencia guerrillera y paramilitar. En Venezuela, el descrédito de la clase política tradicional, que fue arrasando con los partidos y lo que quedaba de ellos, no ha sido suficiente para anunciar su final. Por el contrario, hoy en día asistimos a los «preliminares» de la reconstitución del sistema partidario, que deberá sortear ciertamente unos cuantos obstáculos, que van desde la reestructuración de los aparatos partidistas hasta la movilización de las jóvenes generaciones, que se manifiestan apolíticas y reacias hacia la actividad militante.

¿Tienen futuro los partidos políticos?

Si al desencanto democrático –que, de paso, no se revela tan drástico en las encuestas– agregamos el desmantelamiento de las instituciones, los nuevos escenarios de la política en los países andinos deberían diseñarse con los partidos en franco retroceso o minusvalía. Ello no sucede, y si bien es cierto que el déficit de representatividad de los mismos ha dado lugar, en uno y otro país, al surgimiento de alternativas electorales independientes y antipolíticas, el resurgimiento en nuestros días de los viejos partidos, que se daban muy rápidamente por desaparecidos, reactualiza una hipótesis de trabajo aparentemente abandonada, si no desmentida, por los investigadores. Es el caso del APRA peruano y la AD venezolana¹⁸, en el sentido de que el fin de la era Fujimori en Perú terminaría por dar nueva vida al APRA y el deterioro de la «solución Chávez» en Venezuela terminará por reivindicar a la AD, sin posibilidades de retorno hasta hace poco¹⁹. De hecho, las posibilidades de desmantelamiento de los sistemas partidarios siempre estuvieron vinculadas con la desaparición de los partidos principales o relevantes. Así, a medida que tales partidos iban entrando en declive profundo, su sustitución por otros nuevos se revelaba como una tarea de largo aliento, que suponía la presencia de líderes provistos de convicciones democráticas antiautoritarias²⁰.

Si en años recientes se han advertido unos cuantos factores de cambio en la dinámica política, particularmente aquellos que venían vinculados con la mayor presencia política de los medios y con los avances de la política-espectáculo, es preciso incorporar en

nuestros análisis aquella dimensión sociológica, que se expresa bajo la forma de lo que Ulrich Beck ha denominado *sub-política* y que consiste en el desarrollo de opciones que van más allá de la política institucional²¹. Esto último nos parece en el origen de la desmovilización y apatía de las jóvenes generaciones y del retiro espontáneo de un buen número de electores. En tal sentido, el funcionamiento de las democracias en nuestros días debe incorporar acciones específicas orientadas hacia la rehabilitación de la política, que por largo tiempo se ha mantenido como actividad degradada. Ello implica esfuerzos correctivos de la política de partido, extraviada entre la corporatización de los intereses y la devaluación de las identidades políticas.

Contar con sistemas de partidos fuertes y estables forma parte, desde hace algún tiempo, del desafío democrático en nuestros países. De modo tal que el debilitamiento de las estructuras partidarias tradicionales y el envejecimiento de una clase política tradicional, que luce acorralada e incapaz de desentrañar la naturaleza de los cambios operados en la sociedad, son solo síntomas de una crisis de la participación y de la representatividad, que afecta hoy en día todo proyecto de construcción democrática. Porque las tentaciones plebiscitarias de los nuevos desarticuladores, reacios ante el gobierno de las leyes que el régimen democrático presupone, están allí para demostrarnos que la democratización de la política implica participación cívica del mayor número y no aclamación o delegación de todo el poder en el poderoso de turno²².

Y, si bien es cierto que el sistema de partidos ha sido identificado como un sistema político de privilegios, no es menos cierto que en la región las tentativas antipartidistas, cuando se han impuesto, se han revelado poco democráticas y proclives a la arbitrariedad y al autoritarismo. Asumir a los partidos y sistemas de partidos como instituciones que contribuyen al despliegue de una democracia efectiva no es ciertamente una idea nueva, pero habría que reafirmarla en los procesos de cambio que se adelantan en nuestros países.

Notas

1. Cit. en John Keane: *Reflexiones sobre la violencia*, Alianza, Madrid, 2000, p. 16.
2. V. el apartado «Primacía de la sociedad política en las neodemocracias» en A. Ramos Jiménez: *Las formas modernas de la política. Estudio sobre la democratización de América Latina*, Centro de Investigaciones de Política Comparada, Mérida, 1997, pp. 45-58.
3. V. Alberto Acosta: «El buccarismo en el poder» en *Nueva Sociedad* N° 146, 11-12/1996, pp. 6-16. Tb. Simón Pachano: «Problemas de representación y partidos políticos en Ecuador» en Thomas Manz y Moira Zuazo (coords.): *Partidos políticos y representación en América Latina*, Nueva Sociedad, Caracas, 1998, pp. 139-155; Alegría Donoso y Jorge Ortiz: «Ecuador: Los actores políticos de la transición democrática y de la reforma económica» en Manuel Mora y Araujo (comp.): *Los actores sociales y políticos en los procesos de transformación en América Latina*, Ciedla, Buenos Aires, 1997, pp. 151-177; José Sánchez Parga: *La pugna de poderes. Análisis crítico del sistema político ecuatoriano*, PUCE - CELA, Quito, 1998.
3. V. César Arias Quincot: «Perú. El gélido invierno del fujimorato» en *Nueva Sociedad* N° 171, 1-2/2001, pp. 4-11; Mirko Lauer: «Los partidos políticos peruanos: ¿víctimas de crisis o de golpe» en T. Manz y M. Zuazo: ob. cit., pp. 169-179; y Fernando Tuesta Soldevilla: *Sistema de partidos políticos en el Perú*, Fundación Friedrich Ebert, Lima, 1995.

4. Ver A. Ramos Jiménez: «El liderazgo del 'nuevo comienzo'. Notas sobre el fenómeno Chávez» en *Revista Venezolana de Ciencia Política* N° 18, 7-12/2000, pp. 13-31; Luis E. Lander y Margarita López Maya: «Venezuela. La hegemonía amenazada» en *Nueva Sociedad* N° 167, 5-6/2000, pp. 15-25; tb. Teodoro Petkoff: *La Venezuela de Chávez. Una segunda opinión*, Grijalbo, Caracas, 2000; Medófilo Medina: *El elegido presidente Chávez. Un nuevo sistema político*, Aurora, Bogotá, 2001.
5. V. la tesis de las «falsas promesas» o «promesas incumplidas» que derivan de lo que Bobbio ha denominado «los ideales y la cruda realidad» en N. Bobbio: *El futuro de la democracia*, Fondo de Cultura Económica, México, 1986, pp. 16-31. Una crítica de la propuesta de Bobbio en Danilo Zolo: *La democracia difícil*, Alianza, México, 1994; v. tb. José Nun: *Democracia. ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000.
6. Este modelo democrático ocupa un lugar de privilegio en la literatura politológica reciente; v. A. Ramos Jiménez: *Los partidos políticos en las democracias latinoamericanas*, Universidad de Los Andes, Mérida, 1995; Manuel Antonio Garretón: *Política y sociedad entre dos épocas. América Latina en el cambio de siglo*, Homo Sapiens, Rosario, 2000; Bernard Manin, *Los principios del gobierno representativo*, Alianza, Madrid, 1998; Carlota Jackisch (comp.): *Representación política y democracia*, Ciedla, Buenos Aires, 1998; Adam Przeworski: «Democracia y representación» en *Metapolítica* vol. 3, 4-6/1999, México, pp. 227-257; Marcos Novaro: *Representación y liderazgo en las democracias contemporáneas*, Homo Sapiens, Rosario, 2000.
7. En Venezuela, hasta 1993, los terceros partidos nunca sobrepasaron el «histórico» 8% del electorado. En Colombia, los intentos por incorporar terceros partidos al sistema competitivo se revelaron ciertamente traumáticos y no representaron una real amenaza para el longevo bipartidismo. Cf. A. Ramos Jiménez: *Los partidos políticos...*, cit., pp. 349-350; y Francisco Leal Buitrago: «Los movimientos políticos y sociales: un producto de la relación entre Estado y sociedad civil» en *Análisis Político* N° 13, 5-8/1991, pp. 9-10; v. Pierre Gilhodes: «Sistema de partidos políticos en Colombia» en Oscar Delgado et al.: *Modernidad, democracia y partidos políticos*, Fidec - Fescol, Bogotá, 1993, pp. 69-114; Alfredo Ramos Jiménez: «Venezuela. El ocaso de una democracia bipartidista» en *Nueva Sociedad* N° 161, pp. 35-42.
8. V. René Antonio Mayorga: *Antipolítica y neopopulismo*, Cebem, La Paz, 1995; Francisco Guerra García: «Representación política y crisis de los partidos en el Perú de los 90» en Agustín Martínez (coord.): *Cultura política, partidos y transformaciones en América Latina*, Clacso - Tropykos, Caracas, 1997, pp. 7-33; Carina Perelli: «La personalización de la política. Nuevos caudillos, 'outsiders', política mediática y política informal» en C. Perelli, Sonia Picado y Daniel Zovatto (comps.): *Partidos y clase política en América Latina en los 90*, IIDH - Capel, San José, 1995, pp. 163-204; Gary Hoskin y Gabriel Murillo: «Can Colombia Cope?» en *Journal of Democracy* vol. 10 N° 1, 1/1999, pp. 36-50.
9. Cf. Olivier Dabene: *Amérique latine, la démocratie dégradée*, Complexe, París, 1997, pp. 108-112; Geraldine Lievesley: *Democracy in Latin America. Mobilization, Power and the Search for a New Politics*, University Press, Manchester, 1999, pp. 42-47.
10. Cf. A. Ramos Jiménez: «La política y sus transformaciones. Reflexiones sobre el fin de siglo» en *Revista Venezolana de Ciencia Política* N° 16, 1-6/2000, pp. 11-23; César Cansino: «Crisis y transformación de la política. Reflexiones sobre el Estado finisecular» en *Metapolítica* vol. 5 N° 17, 1-2/2001, México, pp. 90-97. La tesis de que *la política ya no es lo que fue* deriva de una proposición metapolítica, según la cual «la política ya no puede ser el centro natural de control de sociedades enteras», expuesta originalmente por Klaus von Beyme en su libro *Teoría política del siglo XX. De la modernidad a la posmodernidad*, Alianza, Madrid, 1994, p. 26. Cf. René Rémond: *La politique n'est plus ce qu'elle était*, Flammarion, París, 1994; Norbert Lechner: «La política ya no es lo que fue» en *Nueva Sociedad* N° 144, 7-8/1996, pp. 104-113. V. tb. Paolo Flores d'Arcais: «El desencantamiento traicionado» en P. Flores d'Arcais et al.:

Modernidad y política. Izquierda, individuo y democracia, Nueva Sociedad, Caracas, 1995, pp. 13-115.

11. Dentro de su penetrante reflexión sobre los «mecanismos perversos de la democracia», Flores d'Arcais ha destacado así el fenómeno de la profesionalización corporativa de los partidos: «El político de profesión es en líneas generales, una persona 'sin arte ni parte'. ... El único oficio para el que ha sido entrenado es para obtener consenso y distribuir recursos. Sabe de comités, de componendas, de manejo de asambleas y del *do ut des*» (p. 56).

12. El politólogo italiano Angelo Panebianco los ha denominado «partidos profesionales-electorales» en la medida en que los equipos dirigentes son profesionales políticos que poseen débiles lazos organizativos de tipo vertical y se dirigen ante todo al electorado de opinión. Cf. A. Panebianco: *Modelos de partido*, Alianza, Madrid, 1990, p. 492. En la evolución más reciente de las estructuras partidistas en las democracias occidentales, se ha venido imponiendo el así llamado «partido cartel», caracterizado por «la interpenetración entre el partido y el Estado y también por un modelo de colusión interpartidista», lo que ha dado como resultado el hecho de que «los partidos sean una asociación de profesionales, y no asociaciones de o al servicio de los ciudadanos»; cf. Richard S. Kats y Peter Mair: «Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party» en *Party Politics* N° 1, 1995, pp. 17 y 22; Piero Ignazi: «Le pouvoir du parti politique» en Françoise Dreyfus (dir.): *Nouveaux partis, nouveaux enjeux*, Publications de la Sorbonne, París, 2000, pp. 51-74.

13. Contra una hipótesis extendida entre los investigadores, la posibilidad de un desplazamiento de los partidos por los nuevos movimientos sociales ha sido desmentida por la evidencia en países diversos como Chile, Perú y Ecuador. Cf. Frances Hagopian: «Democracy and Political Representation in Latin America in the 1990s: Pause, Reorganization, or Decline?» en Felipe Agüero y Jeffrey Stark (eds.): *Fault Lines of Democracy in Post-Transition Latin America*, North-South Center-University of Miami, Miami, 1998, pp. 124-125.

14. Cf. Bernard Manin, ob. cit., pp. 280-281.

15. Contra una idea muy extendida, las experiencias indigenistas de corte movimientista no han representado fracturas históricas que se expresen como modificaciones sustanciales en los sistemas de clivajes. Si bien es cierto que el katarismo boliviano y el pachakutik ecuatoriano han canalizado en buena parte opciones electorales de carácter étnico en su defensa de los intereses de la masa indígena, no lo es menos que la base del conflicto-clivaje ha sido siempre socioeconómico. Las masas pobres y campesinas han sido hasta aquí más proclives a sumarse a las más amplias clientelas neopopulistas o a lo que sociológicamente se ha definido como «grupos emergentes». En el caso boliviano René A. Mayorga ha observado: «Como movimientos sociales, UCS y Condepa son, en realidad, fenómenos peculiares de 'politización no política' de masas urbanas con rasgos y derroteros bastante diferentes, pero ambos han organizado a los grupos sociales emergentes, han contribuido a integrarlos al sistema político mitigando el potencial de conflictos sociales, y han modificado el escenario político sin provocar un riesgo serio de desestabilización antisistémica» (ob. cit., p. 110). Y en Ecuador, el movimiento indígena, representado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se convierte a partir de 1990 en interlocutor con los gobiernos de turno, pero sin constituirse en una fuerza social autónoma. Trátase más bien de una categoría social dispersa entre el campesinado pobre y la marginalidad de las ciudades que cuenta entre sus dirigentes a profesionales de origen indígena, pero integrados a las luchas políticas de clase. Recientemente se ha observado que «Antropológicamente, por conductas y formas de vida, los expertos estiman el número de indígenas en 'alrededor de un millón', lo que equivaldría a algo menos de 10% de la población ecuatoriana. Tampoco se sabe a ciencia cierta cuántos indígenas se sienten genuinamente representados por la Conaie y por las otras organizaciones, pero está claro que su capacidad de convocatoria y movilización es extensa y sostenida» (Alegría Donoso y Jorge Ortiz: ob. cit., p. 175).

16. De acuerdo con encuestas realizadas entre 1993 y 1997, la confianza o valoración de los partidos en los países andinos resulta demasiado baja (12%) si la comparamos con el promedio del resto de países latinoamericanos (20%), anotándose el hecho de que la misma no alcanza 5% en Venezuela y Ecuador (cf. Marcelo Lasagna: «Política y desarrollo: la brecha institucional de América Latina» en *Revista de Estudios Políticos* N° 110, 10-12/2000, Madrid, pp. 220-222. El clima antipartidista adquiere dimensiones esotéricas en la Constituyente venezolana de 1999: la expresión «partido» desaparece y es sustituida por la anodina «asociación con fines políticos». Así, en el art. 67 de la Constitución Bolivariana se lee: «Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos y candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones *internas* con la participación de sus integrantes...». Como la teoría y la práctica de las democracias occidentales nos lo demuestra, esos «métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección» y esas «elecciones internas con la participación de sus integrantes» son y forman parte de una realidad identificada con la expresión *partidos políticos*. Hasta nuevo aviso.

17. Junto a la conocida tesis de Lipset y Rokkan sobre el «congelamiento» de los sistemas de partidos, dos investigadores norteamericanos habían observado hace algún tiempo el hecho de que en los regímenes democráticos *the old parties never die*, no importando el nivel de «su desgracia» que, en todos los casos, no pasaría de ser temporal. Esto parece aplicarse hoy en Perú y Venezuela, como ya había sucedido en Argentina (la UCR de Raúl Alfonsín) y Bolivia (el MNR de Paz Estenssoro); cf. Key Lawson y Peter Merkl: *When Parties Fail. Emerging Alternative Organization*, Princeton University Press, Princeton, 1988, pp. 561-562. Una reactualización de esta tesis en el apartado «Continuities, Changes, and the Vulnerability of Party» en Peter Mair: *Party System Change. Approaches and Interpretations*, Clarendon Press, Oxford, 1997, pp. 19-44.

18. Comparativamente, las posibilidades de reestructuración del APRA han sido mayores a las de AD. Poseedor de una larga experiencia como partido de oposición, el primero pudo reconstituir después de 10 años lo más esencial de sus cuadros, convirtiendo nuevamente a su líder, Alan García, en una efectiva opción de poder. Por el contrario, la larga experiencia de AD como partido de gobierno, se cuenta entre las causas de un resquebrajamiento de la estructura partidaria de arriba hacia abajo, dejando unas cuantas tendencias y disidencias irreductibles, lo que le ha impedido hasta hoy constituirse en la principal fuerza política de la oposición a Chávez y al chavismo.

19. La resistencia civil –no necesariamente violenta– en contextos autoritarios configura una de las principales «condiciones de emergencia» de los nuevos partidos: es el caso de Perú Posible de Alejandro Toledo y de Primero Justicia en Venezuela. Ello obedece también al hecho de que los nuevos *government parties* en tales situaciones no constituyen sino soluciones provisionales y poco duraderas, demasiado dependientes de su líder fundador en el Gobierno, por lo que sus esperanzas de vida no van más allá del tiempo que se mantengan en el poder. Piénsese en los casos de Cambio 90-Nueva Mayoría en el Perú y en el MVR en Venezuela. Este último cuenta con un precedente de talla: Convergencia Nacional de Rafael Caldera, rápidamente desaparecido con el gobierno de su fundador.

20. Cf. Ulrich Beck: *La invención de lo político. Para una teoría de la modernización reflexiva*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1998, pp. 129-130.

21. No es coincidencia que lo dicho por Fujimori, luego de su amplio y cuestionado triunfo electoral de 1995, en el sentido de que «Perú se enrumba hacia una democracia plebiscitaria» (Fujimori la llamó también «democracia directa»), se reproduzca en el discurso de Chávez en las elecciones sucesivas de 1999, hacia la construcción de una «democracia participativa y protagónica» (cf. M. Lauer: ob. cit., pp. 171-172; A. Ramos Jiménez: «El liderazgo del 'nuevo comienzo...'», cit., pp. 11-33).